

UNA DEMOCRACIA QUE SE CONSOLIDA DEGRADÁNDOSE

Concentración capitalista, vida política y gobernabilidad en Argentina

Daniel Campione(*)

I. Hacia una caracterización de la democracia argentina

En los últimos años, una muy amplia porción del pensamiento político se ha aferrado a una concepción de la democracia que la reduce a un conjunto de reglas (elecciones periódicas, sufragio universal, competencia entre partidos, pluralismo social y cultural, etc.)¹ y que niega toda relación entre ella y un tipo determinado de organización social. Esta idea abreva en una noción *negativa* de la libertad, a la que le importa garantizar que el Estado no interfiera en las actividades del individuo, y a la que no le preocupa que se amplíe -desde una concepción activa, *positiva* de libertad- la participación de la mayoría de los ciudadanos en las decisiones del Estado.

En la práctica, este concepto *procedimental* de la democracia tiende a desvincular a la legitimidad de un gobierno del grado en que satisface los deseos y las necesidades de los ciudadanos, y -a partir de la distinción entre democracia *formal* (procedimientos) y democracia *real* (organización que apunte a una mayor igualdad social)- pretende anular la consideración de aquellos núcleos problemáticos de la construcción democrática que trascienden la formalidad institucional. En este marco, lo único importante serían las reglas de juego (a lo sumo, un conjunto de valores abstractos). Consecuentemente, la distribución de la riqueza, las facilidades para la movilidad social y la calidad de vida poco tendrían que ver con una democracia reducida a una técnica para establecer el orden sucesorio de los gobiernos en condiciones pacíficas y estables².

En el fondo, esta interpretación restringida se asocia con una concepción de la vida social que ubica a las relaciones mercantiles en el sitio supremo de las relaciones humanas y las considera como las únicas dignas de ocupar la inteligencia y el esfuerzo de los seres humanos. Bajo ese manto ideológico, la política sólo es un incómodo residuo, un ámbito en el que -*desgraciadamente*- no funciona la compraventa (al menos, no hay forma de legitimar la plena mercantilización de las relaciones políticas) y en el que no hay más remedio que introducir la votación popular para asignar las funciones de dirección del aparato estatal. El avance de un nuevo modelo de acumulación capitalista -sustentado doctrinariamente en el pleno imperio de las relaciones de mercado, pero que en la práctica se tradujo en un acelerado proceso de concentración del capital y en un incremento de la subordinación del trabajo humano- requiere de un *reduccionismo* del componente democrático como el que acabamos de describir.

La Argentina actual ejemplifica acabadamente esa reducción al mínimo del componente *gobierno del pueblo* en un sistema de liberalismo representativo basado en el sufragio universal. A poco de dos décadas de la restauración constitucional, una *lectura* plausible de la evolución que tuvo el régimen político argentino permite interpretarlo como una democracia cada vez más limitada a lo *procedimental*; no sólo por su pérdida de toda aspiración a transformar a la sociedad de modo más igualitario, sino por la progresiva disminución de la incidencia *ciudadana* en la toma de decisiones y su reemplazo por la acción del gran capital y de una elite política cada vez más estrechamente dependiente de él.

En 1983, la vigencia de la Constitución, el pluralismo, el funcionamiento de poderes públicos democráticamente electos experimentaron una significativa revalorización, después de, como afirma Hilda Sabato, *largas décadas de indiferencia, cuando no de hostilidad o desprecio, hacia los marcos institucionales republicanos*³. Tal rescate colectivo era consecuencia de las terribles heridas dejadas por el terrorismo de estado, pero también de la confianza en revertir mediante los gobiernos elegidos y la *participación* ciudadana, un cuadro de desigualdad e injusticia al que ya se percibía en avance. Esta última expectativa quedó relegada, primero, y convertida en su contrario en los últimos años.

Hoy puede hablarse de una *estabilización* de la democracia argentina, dado que -por primera vez- vivimos el cuarto período consecutivo de presidentes elegidos por sufragio popular; aunque el último de ellos renunciara, tras cumplir dos años de mandato, en medio de la virtual insurrección popular de diciembre de 2001 y ello motivara su reemplazo a través de mecanismos constitucionales de discutibles aspectos en su legalidad y -sobre todo- en el reconocimiento que la ciudadanía hizo de la legitimidad *de origen* de los sucesores.

Queda pendiente el interrogante sobre qué democracia se ha ido consolidando en este período. Como respuesta tentativa puede decirse que ha sido una democracia signada por una correlación de fuerzas ampliamente favorable a una clase dominante que ha acumulado un poder sin precedentes en la historia nacional, tanto en el plano económico como en el político y cultural. El gigantesco proceso de privatizaciones emprendido -cuya amplitud resulta inusitada aun en países que pasaron por *reformas estructurales* de signo neoliberal (México y Brasil, por ejemplo)- fue la base fundamental -pero no única- de un nuevo *posicionamiento* de los grandes conglomerados que recibieron el control de empresas de transporte y servicios públicos, bancos antes públicos, algunas grandes plantas industriales que habían sido de propiedad estatal, medios de comunicación, etc. La creciente concentración del capital, el descenso del salario real y la desocupación creciente, no sólo son el telón de fondo, sino el rasgo saliente de un proceso social que le ha ido asignando sus características⁴. La promesa simbólica que formulaba el primer presidente de la restauración democrática (*con la democracia se come, se cura, se educa...*) se vio drásticamente desmentida en todos sus términos. La democracia de la derrota -como la llaman algunos críticos que filian su origen en la dictadura militar y la destrucción de las organizaciones radicalizadas de los '70- es también la *democracia de la pobreza* y del deterioro de los servicios sociales fundamentales⁵. La incógnita a despejar es qué evolución puede tener este régimen, signado por una extrema concentración del poder en la cúpula y por la exclusión de los sectores populares de las decisiones sociales y económicas fundamentales⁶. Un problema para hacerlo radica en que -en estas condiciones- no sólo se pone en tela de juicio la representación política y el régimen democrático, sino también la idea misma del Estado colocado por encima de la sociedad y al servicio del bien común que es constitutiva de todo Estado asentado en los principios del liberalismo⁷.

La recuperación del régimen constitucional en Argentina, se enmarcó en un proceso restaurador de regímenes constitucionales en Latinoamérica producido a partir de los primeros '80 a instancias de los propios EE.UU., que renunciaban así a mantener dictaduras que -paradójicamente- se habían revelado peligrosas e ineficaces para garantizar sus intereses y, en algunos casos, hasta los propios de las burguesías locales. Algunos de estos regímenes, como fue el caso particular del argentino, habían destruido previamente movimientos políticos que postulaban una transformación social radical, al tiempo que se producían procesos de fragmentación de la clase obrera y de los sectores populares, signados por el re-*disciplinamiento* de las clases subalternas que, a juicio de las clases dominantes, habían cultivado pretensiones *excesivas*⁸. El cumplimiento de esa *tarea*, la única para la que se había mostrado realmente eficaz la dictadura argentina, constituyó una base cierta para un retorno *seguro* a la institucionalidad democrática.

La salida de las dictaduras se aceleró por la crisis de la deuda externa y la manifiesta incapacidad política de la mayoría de ellas para generar un consenso en amplios sectores de la población (con la excepción parcial de Chile⁹) y no por imperio de movimientos de resistencia; por lo cual, las transiciones se produjeron en circunstancias de debilitamiento de las organizaciones populares que podrían haber influido en una profundización del proceso democratizador.

Una de las primeras cuestiones a establecer al abordar el período de restauración de la democracia en Argentina es la correlación temporal entre el cambio de régimen político y la configuración social, económica y cultural de nuestro país; o -más específicamente- vincular esas transformaciones con el desarrollo de la confrontación de clases. De no hacerlo así, se corre el riesgo de centrar el análisis en la institucionalidad política y dejar afuera determinaciones sustanciales de las características del desarrollo de la democracia argentina en estos años. En las últimas dos décadas, el conjunto de las relaciones entre clases, grupos y actores sociales se modificó de tal modo que dio una preeminencia de nivel hasta ahora desconocido al núcleo más concentrado de la clase dominante y alteró toda la relación entre el Estado y la sociedad¹⁰.

Durante un siglo, Argentina fue una sociedad que -al avanzar de diferentes modos en la *integración* de sectores crecientemente amplios de su población- generó la ilusión de una *sociedad abierta* que brindaba amplias oportunidades de progreso, tanto a los individuos como al conjunto social.

En cambio, a lo largo de los últimos veinticinco años, se instaló en el país una tendencia contraria y cada vez más profunda hacia la *des-ciudadanización* de grupos sociales cada vez más numerosos. Ello no pudo dejar de tener gran incidencia sobre el modo de articular las relaciones entre el Estado y la sociedad, y sobre el modo de construir legitimidad desde el Estado, que ya no pudo apelar a la promesa de movilidad social ascendente, ni a los beneficios de una versión *pobre* -aunque eficaz- del Estado de Bienestar.

Al restaurarse la democracia en Argentina, en el mundo se socavaba el estadio de acumulación capitalista que permitía a las economías nacionales tener una relativa autonomía del mercado mundial a partir de compromisos de clase y arreglos neocorporativos que sostenían las trabas puestas al movimiento internacional de bienes y capitales en favor del desarrollo y protección del mercado interno nacional¹¹. *En el caso argentino, las organizaciones sindicales habían alcanzado una amplia influencia política y eran tenidas ampliamente en cuenta -incluso por las dictaduras militares-, lo que se conjugaba con un proceso de industrialización orientado al mercado interno.*

En este marco, se inició un proceso de estabilización institucional orientado y estructurado a partir de políticas -cada vez más directamente determinadas por el gran capital- que adoptaron los gobiernos elegidos por sufragio popular¹². No sólo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica, los capitalistas hicieron de las democracias representativas sus subordinadas más eficaces. En comparación con las pasadas dictaduras militares, éstas agregan el plus de legitimidad provisto por la existencia del sufragio

universal, sin el *costo* de amenazas más o menos serias, hasta el momento, a la configuración clasista de la sociedad.

Por su parte, el Estado renunció a los objetivos que se había propuesto a partir de 1945 (desarrollo de políticas sociales integradoras, redistribución de ingresos mediante variados tipos de *transferencias* y búsqueda de alianzas con un empresariado capitalista en base a estrategias de acumulación vinculadas a un mercado interno de masas. Tras las *reformas de mercado*, la definición de la estructura y el rol del Estado no fue mucho más allá de vagas nociones de reconstrucción del *estado-gendarme* clásico, con el agregado de tener que desempeñar un papel en las políticas sociales y en la educación con un perfil más ligado a la financiación, planificación y control que a la asunción directa de responsabilidades en esas actividades¹³. A ello se agregaron algunos replanteos ligados al plano ideológico: la idea de manejar al estado como una *empresa*, con orientación al *cliente* (en lugar del ciudadano o usuario de la concepción tradicional), que *vende* bienes y sobre todo servicios¹⁴. De todos modos, al menos en el caso argentino, esa re-construcción no se cumplió y la educación, la salud pública, la justicia no han dejado de deteriorarse. Como afirma Nun, el aumento de la pobreza y de la desigualdad están *conduciendo a la consolidación de democracias representativas excluyentes, con una minoría de ciudadanos plenos, lo cual equivale a decir que se trata de regímenes políticos poco democráticos y poco representativos*¹⁵.

Lo que en su momento Przeworski¹⁶ llamó la construcción de *bases materiales de la hegemonía*, ha sido dejado de lado en los objetivos de las políticas públicas de nuestro país que prefirieron apostar al aislamiento, la desorganización y desmovilización de las clases subalternas antes que a generar mecanismos destinados a mejorar sus ingresos y calidad de vida como modo de compensar la aceptación de *reglas de juego* sustentadas en la desigualdad y la explotación de la sociedad capitalista.

El proceso de deterioro que sufre la institucionalidad en Argentina se ha vinculado con la crisis de las representaciones políticas. Esto puede ser válido, a condición de que se tenga en claro que, en nuestro país, dicha crisis es sólo un capítulo de una declinación más vasta que abarca el estancamiento económico, la desarticulación del aparato estatal, la pérdida de eficacia de las apelaciones ideológicas tradicionales y -sobre todo- el brutal aumento de la desigualdad social y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población¹⁷. Lo que hoy empieza a aparecer claro, es que está muy seriamente puesta en tela de juicio la idea de consumir un proceso de ampliación de la desigualdad y concentración del poder en todas sus dimensiones, sin que se afecten los procedimientos institucionales que configuran a una democracia parlamentaria¹⁸.

II. ¿Qué democracia tenemos?

Varios autores entienden a la democracia de los 80-90 como una democracia degradada como consecuencia de las instituciones forzadas por el *decisionismo* de las jefaturas de Estado¹⁹. Nos inclinamos a pensar que se trata de fenómenos más profundos: asistimos a la transformación del contenido de un régimen político sobre una armadura jurídico-constitucional que, en lo sustancial, permanece intocada. La representación política (aun con todas las limitaciones de la democracia parlamentaria) y el sentido amplio de ciudadanía tienden a fenecer, a favor del imperio indiscutido de una *elite* política que -sin más compromiso firme que el de procesar las orientaciones del gran capital- pone toda su dedicación y recursos en posicionar al país en el mercado mundial, optimizar las posibilidades de obtención de ganancias por la gran empresa en su ámbito territorial y adecuar -en lo posible- el plano ideológico-cultural a esos requerimientos. Hacia afuera de las clases dominantes, esta *elite* se preocupa por la *gobernabilidad*; es decir, por evitar las consecuencias políticas perturbadoras de la falta de equidad y las desigualdades reinantes, en lugar de solucionarlas efectivamente. Un agravante de singular importancia es que la *elite* política no cumple a pleno con las funciones que el *modelo* le asigna; así -por ejemplo-, no logra generar condiciones de *competitividad* internacional para Argentina.

Las posibles reacciones adversas del capital ante políticas que considere perjudiciales a sus intereses no son susceptibles de contrapesos; ya que, en esta etapa, está en condiciones de trasladarse a bajo costo de un país a otro e incluso de mudarse a otra zona del mundo; razón por la cual los estados nacionales se ven impulsados a adaptar sus políticas a los *requisitos de ingreso y permanencia* que fijan los propios capitales y los organismos financieros internacionales²⁰.

En ese sentido, las casi dos décadas de régimen democrático-constitucional vividas aparecen claramente vinculados a una ofensiva de las clases dominantes de alcance mundial que en nuestro país comenzó a manifestarse con claridad en torno a 1975. El parentesco que el *shock* económico del ministro Celestino Rodrigo y el planteo de apertura económica, desregulación financiera y *subsidiariedad* del Estado de la dictadura militar tienen con las reformas estructurales puestas en discusión a partir de 1985 e implantadas desde 1989 no obedece a semejanzas *formales* de las políticas, ni puede reducirse a coincidencias ideológicas entre distintas generaciones de *fundamentalistas de mercado*.

Por el contrario, unas son el presupuesto necesario de las otras: la acción represiva de la dictadura militar, explícitamente orientada a *derrotar a la subversión*, estuvo realmente encaminada a la tarea estratégica de desarticular la organización obrera y popular, y más aun, sus bases materiales²¹, como modo de hacer viables las reformas que luego se emprenderían.

Tomada desde el ángulo de las clases subalternas, la distancia existente entre la movilización desde las bases que terminó por forzar a la dirigencia sindical a ir a la huelga contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón, al comienzo del período, y el desconcierto paralizante que sucedió a la derrota de las primeras resistencias antiprivatistas en 1990-91 tiene como ejes

explicativos fundamentales los resultados de la represión y las políticas dictatoriales, la fragmentación de la clase obrera, el debilitamiento del poder sindical para dejar campo libre a las patronales²², la caída de las expectativas en la realización de transformaciones profundas en nuestro país; todo ello alimentado por el propio *desencanto* con la democracia suscitado por el deterioro del nivel de vida y la pérdida de *ciudadanía* que desde 1983 no dejaron de acompañar al régimen en nuestro país. La sólida reacción frente a los esbozos iniciales de la *revolución conservadora* en los 70' se transfiguraron en desconcierto y pasividad a comienzos de los 90'. Las experiencias negativas acumuladas en dos décadas, favorecieron la implantación de un nuevo modelo que destruyó al Estado populista-desarrollista construido en los '40 y que venía sufriendo una prolongada agonía.

Los dieciocho años transcurridos desde la restauración de las instituciones constitucionales han sido -en el plano del proceso de concentración del capital y de expropiación de las condiciones de trabajo y de vida de las clases subalternas- una sustancial continuidad. En ese plano, la transición al régimen democrático y su estabilización no les trajo aparejada ninguna ventaja apreciable, sino -al contrario- la persistencia del deterioro social y la expansión de las carencias a sectores cada vez más amplios²³. Con el punto de partida de la fuerte revalorización de la democracia producida a raíz de la última experiencia dictatorial y los daños que ésta acarreó, la opinión favorable a la continuidad del régimen democrático no se ha debilitado decisivamente, pero no puede asegurarse que ello continúe así por tiempo indefinido. La diferencia fundamental con lo que ocurría en las etapas anteriores es que la quita de consenso al régimen político no adquiere las formas de una demanda de *orden* y de cierre autoritario de la situación crítica, sino de un repudio que tiende a buscar -aún a tientas- soluciones basadas en la mayor movilización e injerencia popular en la toma de decisiones.

En cambio, si nos remitimos a una caracterización del funcionamiento de la institucionalidad política, se comprueba la vigencia -a grandes rasgos- del régimen establecido en la Constitución Nacional, por lo que el panorama podría resultar, en principio, optimista. Argentina experimentó en 1989 el primer traspaso de mando realizado en décadas por un presidente regularmente elegido a otro designado en iguales condiciones²⁴. A su vez, ese cambio de gobierno constituyó el primer caso en la historia del país en que un jefe del Ejecutivo perteneciente a un partido transfería el mando a otro de un partido opositor. Si bien los siguientes diez años de gobierno de Carlos Menem marcaron algunas amenazas al régimen constitucional (sobre todo por vía de la voluntad reeleccionista del presidente), éstas fueron conjuradas, primero por el Pacto que permitió la reelección presidencial de 1995, y luego por el fracaso de la segunda tentativa ante las condiciones de repudio popular que convencieron a Menem de abandonar su aspiración. Como telón de fondo de todo el proceso hubo condiciones más que aceptables de limpieza electoral -sin proscripciones importantes de organizaciones políticas ni de personas-, funcionamiento ininterrumpido del Congreso de la Nación y vigencia también aceptable²⁵ de las libertades públicas. La lista de deficiencias institucionales que pueden señalarse es larga y relevante, incluyendo el funcionamiento de la Justicia, las falencias en la aplicación del orden legal, el papel jugado por la policía y otras fuerzas de seguridad; pero no alcanza para alterar este juicio fundamental.

Una década después, en 1999, fue el gobierno del Partido Justicialista el que transfirió el mando a otro presidente radical. La continuidad del régimen y la alternancia de los partidos completó, de algún modo, su ciclo y evidenció una consolidación de la institucionalidad democrática que sólo fue el presagio de una crisis muy fuerte de la misma.

Sin embargo, si se intenta una mirada más abarcativa, es claro que puede pensarse a todo el período histórico en términos de una *crisis orgánica* o *crisis global* de nuestra formación social que afloró con toda su fuerza entre fines de los 60' y comienzos de los 70', y que en 1975 dio lugar a una contraofensiva económica, cultural, política y militar de las clases dominantes que procuró articular una estrategia de erradicación de las causas profundas de lo que se consideraba genéricamente como *subversión*. Para las clases dominantes, las organizaciones obreras poderosas y las políticas estatales de corte keynesiano eran parte de esas *causas*, y su progresiva destrucción fue un presupuesto necesario de las transformaciones posteriores inspiradas en el mismo sentido de clase.

Aprovechando la coyuntura económica y políticamente favorable de parte de los 90', ha habido en los últimos años muchos síntomas de *normalización* del sistema político que, tomados aisladamente, pueden leerse como una *consolidación* democrática. Pero una lectura un poco más fina, refleja otra realidad. Se ha ido configurando una democracia remitida exclusivamente al plano político, sin pretensiones de transformación social y en la que asume toda su fuerza la visión de las teorías elitistas de matriz *schumpeteriana*, para la cual el cuerpo electoral sólo escoge a quién tomará las decisiones, pero sin ninguna otra incidencia efectiva en el sentido y orientación de las mismas; es decir, aun en su estrecha dimensión el componente de decisión popular tiende a tornarse ilusorio²⁶. Con el agravante de que tal enfoque viola las premisas originales de Schumpeter, quien priorizaba el desarrollo económico y circunscribía su campo de aplicación al capitalismo occidental²⁷. Todo ello en un cuadro en el que la política, reducida a *administración de lo existente*, viene a (producir en la práctica) crecientes niveles de pobreza, exclusión y desocupación, como ya expresáramos más arriba. El *desencanto* ha alcanzado a amplios sectores de capas medias que apostaban a cubrir limitadas expectativas -como, por ejemplo, no descender del nivel social alcanzado- y que se han visto empujados al límite de la pobreza, o que -directamente- lo han traspuesto.

En ese cuadro, el juego democrático sumó crecientes niveles de apatía, de desmovilización, que no son producto de cierta adhesión pasivamente satisfecha a un sistema en el que no se desea participar -como puede ocurrir en algunos países capitalistas más desarrollados- sino que reflejan la autoexclusión de un orden político con el que buena parte de la ciudadanía experimenta una pérdida de identificación. En los hechos, hay una caducidad de la ciudadanía social y económica que se proyecta hacia la privación (o renuncia²⁸) de la ciudadanía política. Y, en tanto que ese apartamiento o autoexclusión no conlleva expresiones

activas de descontento, se vuelve funcional a la perpetuación de los sectores dominantes en los planos político y económico que, si bien no la propician abiertamente, no se preocupan seriamente por evitarla.

El debate en torno a cualquier proyecto de transformación social profunda ha sido obturado en nombre de la preservación de la *governabilidad* de la democracia, en un clima en el que -como afirma Carlos M. Vilas- la consigna implícita parece ser *no hagan olas* y cuyo resultado es el mantenimiento de una específica dominación de clase, tornada *intangible* por la necesidad de proteger al régimen político de las posibles iras de los capitalistas²⁹. La problemática de la *governabilidad* apenas oculta una incitación a la pasividad más o menos resignada de las clases populares, cuyo nivel de organización y lucha debería mantenerse en planos acotados, incompatibles con cualquier cuestionamiento de fondo al orden social, político y cultural existente, so pena de poner en riesgo la *estabilidad democrática* laboriosamente alcanzada. Esto termina en la búsqueda de una consolidación democrática de signo conservador, que apunta a clausurar toda aspiración de ampliar la participación política y la movilización social. Por el contrario, convierte a la desmovilización y des-organización de las clases subalternas en un reaseguro fundamental de la construcción de una democracia *governable*. Es como si la sociedad argentina purgara, a través de la nula audacia de las propuestas y de los programas en circulación, la *excesiva* intrepidez en las demandas de los últimos '60 y primeros '70, prolongando en el tiempo los efectos disciplinadores del terror dictatorial.

Así las cosas, la *elegibilidad* de los partidos políticos y de los dirigentes dentro de ellos tiene una referencia fundamental en la disposición a mantener una relación amigable con el gran capital, el que -por otro lado- confía cada vez más en la posibilidad de *disciplinar* rápidamente cualquier tentativa de desarrollar una política diferente. La abstracción conocida como los *mercados*, sombra siempre dispuesta a saltar sobre gobernantes que se aparten de las estrechas normas de *previsibilidad* vigentes, alude en gran medida a la capacidad de los grandes inversores para dar señales inmediatas de desaprobación a una política determinada, creando a su vez una sensación de descontrol y caos orientada al fracaso de la misma. Ese poder fáctico de veto que posee el *mundo de los negocios* es un condicionante de las políticas gubernamentales y de los programas partidarios que resulta más fuerte y difícil de contrarrestar que otros mecanismos aparentemente más directos como lo son el financiamiento de los candidatos por la gran empresa, la manipulación de los medios de comunicación en favor o en contra de determinadas fuerzas políticas, etc.

En realidad, el régimen democrático-constitucional se ha revelado, hasta ahora, no sólo poco riesgoso para los intereses del empresariado más concentrado, sino que desde 1989 permitió que -con el aval adicional del voto popular- se dismantelara toda la estructura del Estado intervencionista en beneficio casi exclusivo de las grandes empresas y que se aplicaran de manera absoluta y consecuente los programas neoliberales. A ello se agregó un profundo realineamiento de la política exterior en consonancia con todas y cada una de las posiciones sustentadas por EE.UU. y sus aliados más cercanos, que -en el plano político- reforzó la subordinación completa al interés capitalista.

IV. El "estado" actual de los partidos políticos. ¿Maduración o decadencia?

La Argentina anterior a 1983 era una sociedad en la que existían partidos de masas con capacidad de movilización y que -en general- se identificaban con políticas de Estado de Bienestar, de desarrollo del mercado interno y de integración social y política de sectores populares. Las diferencias más profundas entre los principales partidos (el justicialista y el radical) cursaban más en torno a las clases sociales y organizaciones que les servían de apoyo fundamental (trabajadores y sindicatos para el justicialismo, capas medias para el radicalismo) y a las distintas valoraciones de la institucionalidad democrática (mucho más central entre los radicales, más cercana a un instrumento para los justicialistas), que a propuestas programáticas de fondo.

A partir del retorno a la institucionalidad democrática, apuntó a consolidarse un sistema bipartidista que tuvo como protagonistas a las mismas fuerzas políticas, pero inmersas en un proceso de modificación tanto de su propuesta programática, como del conjunto de sus prácticas. Lo que al comienzo despuntó como una pronunciada moderación en las aspiraciones de cambio que ambos partidos habían sustentado hasta los '70, se fue tornando en algo más profundo:

- a) La progresiva adopción que estos partidos de tradición *popular* hicieron de posturas cada vez más identificadas con propuestas propias de la derecha conservadora del país.
- b) La propensión a estrechar cada vez más los vínculos con el gran capital local e internacional, aun a riesgo de debilitar y modificar regresivamente su relación con las clases populares.

Los fenómenos de profesionalización de los cuadros, de desradicalización ideológica y desmovilización de las bases que suelen asociarse a la transformación de los partidos políticos en organizaciones del tipo *atrapa-todo* se realizaron a pleno en el conjunto de los partidos argentinos con incidencia electoral significativa. Los otrora *partidos de masas* se aproximan gradualmente a una conformación de meras maquinarias electorales, cuyos votantes no responden a un claro recorte de clase, y cuyas propuestas programáticas no sólo no se diferencian apreciablemente, sino que se desplazan al unísono en un sentido progresivamente conservador.

En cuánto a su rol como componentes del *sistema de partidos*, además de su legitimación recíproca y aceptación del juego competitivo, todas las fuerzas han tendido a acatar la disminución de la autonomía de los estados nacionales a nivel mundial, aceptando -en consecuencia- que los gobiernos electos democráticamente salieran del *campo de decisión* de toda medida que implicase algún grado de confrontación con los intereses del gran capital. Las grandes líneas del manejo macroeconómico tienden a integrarse de *facto* a sendas *políticas de estado*³⁰, invariables mas allá de eventuales cambios de gobierno, aun con la

alternancia entre diversos partidos. Esto tiene como reaseguro el consenso de un difuso conjunto de actores sociales ligados al gran capital, en el que se mezclan conglomerados internacionales del capital financiero, organismos financieros internacionales, los gobiernos de los estados más prósperos, grupos económicos menos transnacionalizados pero con peso decisivo en el plano local, etc.

En Argentina, esta aparente *normalización* del sistema de partidos³¹ se produjo en condiciones de empobrecimiento y marginación creciente, al tiempo que aumentaban las tasas de desempleo, subempleo y cuentapropismo. Cierta apatía política existente no contiene -por cierto- elementos de una cultura de la satisfacción que deja de aspirar a la transformación social radical en función de importantes beneficios materiales y simbólicos más inmediatos y seguros, como ocurre en parte de Europa, EE.UU. y otros puntos del mundo desarrollado; beneficios muchas veces garantizados por la existencia de fuertes organizaciones sindicales de reconocida influencia sobre las políticas públicas. Por el contrario, localmente se extiende el descreimiento hacia un orden político que sólo ofrece una permanente profundización de la redistribución regresiva de los recursos (no sólo materiales) y que procura confinar a amplias masas de la población a una situación signada por la desorganización y el refugio en un individualismo de la supervivencia.

Las organizaciones que en la etapa anterior estaban ligadas con la defensa corporativa de los intereses de las clases subalternas, comenzando por los sindicatos, añaden a su acentuada pérdida de poder un inusitado nivel de cooptación por las políticas neoliberales que *bajan* desde el Estado.

En estos últimos años se ha predicado, y llevado a cabo, el reemplazo de la figura del militante por la del funcionario; el otorgamiento de un lugar más destacado a tecnócratas y especialistas y la puesta en marcha de un aparato de *marketing* y publicidad política altamente profesionalizado.

También se produjo una particular estratificación de la dirigencia partidaria. El muy reducido número de *referentes* instalados en la cúspide lleva el peso de la cotidiana comunicación *mass-mediática*, así como el protagonismo en los actos públicos durante las campañas electorales. Por debajo de ellos, están los *operadores* que se encargan de poner en ejecución las decisiones del nivel anterior y que están más directamente comprometidos con la consecución de recursos, la negociación de alianzas internas y externas, la dirección de equipos de asesores, el mantenimiento y enriquecimiento de los vínculos con el poder económico, etc. Ya más cerca de la base, tienden a predominar estructuras de cuadros de nivel local, también profesionalizados, encargados de aceitar los mecanismos clientelísticos que -en una peculiar mezcla de modernidad y tradición- subsisten y se desarrollan junto con las grandes operaciones mediáticas y los arreglos tecnocráticos. De algún modo, estos últimos forman el *otro lado* de la política *mass-mediática* y tecnocratizada, un sustento semioculto y de apariencia arcaica de las operaciones ultra-modernas que campean en la superficie, en un proceso similar y tributario, al ya señalado al interior del aparato estatal³².

Con el desmontaje de las políticas sociales con pretensión de universalidad, se abrieron espacios para un nuevo clientelismo que ya no proviene de relaciones sociales precapitalistas. Este nuevo clientelismo adquiere relevancia en escenarios de *creciente pobreza y desigualdad, desempleo y subempleo y retirada del estado, como los que caracterizan a la Argentina de los años noventa*³³. Encuentra parte de sus fuentes en la pretensión de ejercer la contención de sectores sociales excluidos o marginalizados, a través de políticas sociales focalizadas, destinadas a funcionar como *ambulancia* que recoge a los heridos³⁴. Mediante esas políticas de contención, se canalizan hacia los sectores más empobrecidos fondos públicos, cuya administración se convierte en eslabón fundamental de vínculos de reciprocidad que configuran una relación de intercambio desigual en la que se trueca el acceso al asistencialismo por el voto (o la asistencia a actos políticos y colaboraciones en campañas electorales). Asimismo, la administración de estos *programas* posibilita ubicar en los escalones más bajos a militantes profesionalizados cuya actividad proselitista se sustenta con los propios fondos de los *programas*. El nuevo carácter de este clientelismo y su compatibilidad con formas más modernas de la actividad política se evidencia, sobre todo, en el PJ. Este partido, nacido a la política como un movimiento superador de la manipulación *paternalista* de las masas populares, con la plaza pública como escenario fundacional y una muy temprana utilización de los medios masivos (los discursos radiales de Perón datan de su época de Secretario de Trabajo y Previsión entre 1943 y 1945), ha construido a partir de 1983 una densa trama clientelar, no ya en las provincias más *atrasadas*, sino en la propia Capital Federal y -en amplísima escala- en el Gran Buenos Aires³⁵.

La militancia orientada por una ideología (o en su defecto por un conjunto de convicciones políticas *de principios*), dispuesta a empeñar trabajo personal y recursos sin ninguna compensación material directa o en términos de acceso a cargos u otras prebendas, tiende a alejarse de los espacios partidarios tradicionales y es reemplazada por relaciones guiadas por el beneficio recíproco bajo la dirección de gente que hace de la política su medio de vida, muchas veces no por una vocación por la actividad pública, sino porque no tiene otra profesión de la que vivir³⁶, o la que tiene le proporcionaría menos beneficios.

No se trata -por cierto- de que la militancia ideológicamente motivada, desinteresada en términos materiales, haya dejado de existir; sino que se ha confinado en movimientos no partidarios y en agrupaciones radicalizadas y en muchos casos teñidas de un rechazo general hacia la política que se percibe -no sin razón- como reducida a la desenfrenada realización de intereses personales o de grupo con la cobertura del aparato estatal y las organizaciones partidarias como instancia de legitimación y con el capital más concentrado como sempiterno beneficiario en última instancia.

Sin embargo, ese escepticismo global dificulta la visualización de un campo común de acción para los sectores explotados y

excluidos³⁷. Los movimientos no partidarios suelen quedar atrapados por diferentes *particularismos* (su implantación meramente local, su dedicación a una reivindicación o gama de reivindicaciones circunscriptas, la raigal desconfianza hacia cualquier *dirigencia* que exceda al propio movimiento, etc.), además de estar sometidos a fuertes presiones en el sentido de la cooptación por organismos internacionales y otras fuerzas atadas al *establishment* que procuran domesticarlos a las pautas de la *governabilidad*³⁸ y les presentan pseudo-alternativas a la política tradicional. Mientras tanto, las fuerzas partidarias identificadas con el sistema no ofrecen campo para las demandas populares, más que en la forma ya vista del *clientelismo*, y las propuestas partidarias con pretensión alternativa no alcanzan a salir de una posición marginal.

V. El disciplinamiento del debate político y las limitaciones de la acción estatal

Desde 1983 -y más claramente a partir de 1989- las instancias de poder, tanto institucionales como *fácticas*, quedaron cada vez más subordinadas en el conjunto social, con la fundamental excepción de aquellas vinculadas con la gran empresa. Esa orientación que privilegió al núcleo del poder económico mientras combatió y desorganizó a casi todos los demás sectores sociales, ha ido dejando de ser una política gubernamental para convertirse en un *consenso* fundamental que subyace en toda la discusión sobre el destino de la sociedad, estrechada hasta límites antes impensables, y -en consecuencia- en las políticas propuestas desde el Estado.

En realidad, un cambio cualitativo en la actitud de la dirigencia política opositora y de oficialistas con tendencias disidentes, comenzó a producirse cuando Menem demostró sobradamente que su definitiva opción estratégica era aliarse con los grandes grupos locales, el gran capital a nivel mundial y EE.UU. como sede máxima de ese gran capital y que a ella subordinaría todas sus actitudes tácticas y posiciones coyunturales; algo que quedó cabalmente probado, a más tardar, entre 1991 y 1992. Ello se complementó (y complejizó) cuando el Plan de Convertibilidad y la estabilidad económica, el ingreso de nuevos capitales, el descenso de la inflación y el ingreso pleno de Argentina al Plan Brady, entre otros cambios, comenzaron a hacer comprender que era irracional esperar que la presidencia de Menem se hundiera rápidamente en un caos similar al de los últimos años de su antecesor, expectativa que muchos opositores habían anidado en vano durante un buen tiempo.

Ante esa evidencia, los actores políticos del oficialismo y de la oposición *hicieron sus nuevas cuentas* y, en lo fundamental, comenzaron a dejar de *confrontar* con cambios que percibían como indeseables para *adaptarse* a las transformaciones que aparecían como irreversibles. A medida que la política de gobierno de Menem profundizó su alcance y demostró su perdurabilidad, produciendo una apariencia de *capitalismo que funciona* que -sobre todo- se expresaba en el crecimiento económico de los primeros '90³⁹, los políticos opositores y los disidentes del oficialismo (entre ellos, buena parte de la dirigencia sindical) comenzaron, primero implícita y luego explícitamente, a aceptar que las *reformas de mercado* se habían convertido en una *política de estado*. La discusión política dejó de abarcar a esas reformas, ya plenamente aceptadas en sus ejes fundamentales, y hubo cada vez menor resistencia ante las medidas que se instrumentaban⁴⁰. Ocurría que el fin (luego revelado temporario) de la amenaza permanente de moratoria de la deuda externa, el control de la alta inflación, la implantación de una economía menos regulada y la *apertura* a capitales y bienes del exterior equivalían a la *solución* de algunos de los grandes problemas del país según el diagnóstico del *Consenso de Washington*, los organismos internacionales y los grandes *think tanks* del neoliberalismo. Si bien los problemas que aquejaban a las grandes masas populares seguían en su mayoría no sólo sin resolverse, sino agravándose (la pérdida del poder adquisitivo del salario real, el deterioro del salario social, la desocupación llevada a niveles récord, la existencia de un sistema impositivo de escandalosa regresividad, las elevadas tasas de interés para los préstamos a consumidores y pequeños empresarios, etc.), las fuerzas políticas de oposición con peso electoral decidieron apostar en la práctica a profundizar los rasgos desmovilizadores y *espectacularizados* de la democracia realmente existente. Por su parte, los grandes empresarios y el mayoritario sindicalismo oficialista no hicieron más que apuntalar ese modelo tan consecuente en expropiar capacidad efectiva de decisión a la mayoría de la población y en erigir a las necesidades de acumulación como la meta suprema de toda actividad política.

Hay que reconocer que durante toda la etapa democrática las condiciones políticas han sido casi invariablemente difíciles para proyectos de transformación social profunda, algo que se hizo aún más claro desde los primeros '90 con la ideología de la *globalización* ilimitada e indetenible como su justificación.

Todo concurría a construir una visión para la cual de nada valía enfrentar el fuerte *poder de veto* del gran capital a cambio del hipotético apoyo que las masas brindarían a una alternativa transformadora. Así, la política se hizo -en cierto modo- indigna de tal nombre; pues la noción de la misma como lucha por el poder entre diferentes grupos que pretenden orientar los destinos de la sociedad como portadores de intereses sociales diferenciados y -por tanto- de proyectos políticos distintos si no opuestos, quedó desvalorizada frente a la ostensible realidad de que quienes disputaban en la arena política con posibilidades reales, aceptaban plenamente que los destinos de la sociedad se resolvían por fuera de las instituciones y del ámbito político y que la *lucha* se limitaba a dirimir quiénes ocuparían los roles directivos en el aparato estatal para gestionar cotidianamente estrategias y tácticas predeterminadas.

Como afirma Pucciarelli, comienza así un proceso de *aislamiento-autonomía-autorreferencia* de la dirigencia política, con los grandes partidos adhiriendo al neoliberalismo y aceptando la *brutal reducción* del rol de la política y del Estado en la regulación de las relaciones sociales⁴¹. La *agenda* pública fundamental se decide en recintos cerrados, muchos de ellos -como los organismos financieros internacionales- situados fuera del ámbito geográfico nacional y dotados de un imperio cada vez mayor y más evidente sobre las políticas públicas. En este marco, *seducir al capital* -un capital cada vez más trasnacionalizado en su origen y volátil en su

radicación- se volvió la tarea fundamental de los gobernantes democráticos.

Para comprender parte del éxito menemista en la conservación del consenso en momentos decisivos y en la atracción de los opositores hacia sus propias posiciones -o, al menos, a su modo (y sus límites) a la hora de encarar la discusión- hay que considerar que tales posiciones no perjudicaron a la sociedad argentina entera ni beneficiaron sólo a una *ínfima minoría*. Un holgado 20% de la sociedad vio aumentar sus ingresos y su nivel de vida (al menos hasta 1996-97). Por debajo de esa capa superior, había un sector medio que -aunque perjudicado en líneas generales- aún tenía bastante que perder. Eso le proporcionaba razones para temer por la desestabilización de una economía que, por momentos, le permitía sentirse beneficiado a través de las facilidades para acceder a nuevas modalidades de consumo, cambiar más frecuentemente de automóvil, hacer turismo en el exterior o resguardar el valor de sus ahorros, aunque fuesen escasos. Creemos que esa *franja media* brindó la base social a políticas que -siendo críticas de las implicancias antirrepublicanas y poco éticas de los gobiernos de Menem- se mostraron dispuestas a aumentar la moralidad y racionalidad de los cuadros de gobierno pero que, a la vez, fueron prudentes en las correcciones económicas. Se compatibilizaron así ciertas aspiraciones de mayor equidad y de algún margen de recuperación de la autonomía nacional en el manejo de la economía y de las relaciones exteriores, con el celoso mantenimiento de la buena relación con los grandes poderes mundiales y el *trato benévolo* a los capitalistas dispuestos a invertir y dar trabajo en el país. Todo ello, acompañado por la disposición a recuperar algún nivel de políticas sociales de alcance amplio, en una mezcla de humanismo altruista y de preocupación por el orden social y la seguridad de la propiedad son rasgos típicos de las capas medias *ilustradas*. Esas preferencias, con proporciones ligeramente distintas en sus diversos componentes, hicieron aparecer como prometedor a un arco que incluía a dirigentes que hacían de la moderación un principio aplicable en todos los campos junto a otros con mayores preocupaciones por la equidad social y los derechos humanos pero claramente afiliados al credo de la libre empresa como forma fundamental de organización social y de adaptación de las decisiones y acciones estatales a la asunción de dicho principio. Tras la aparición del Frente Grande-Frepaso (1993-1995), la alternativa progresista se fortaleció en lo electoral (culminando con el triunfo en las legislativas de 1997 y en las presidenciales de 1999, ya en alianza con el radicalismo⁴²), al tiempo que era cooptada por los modos de hacer política y los contenidos programáticos que -simplificada y equivocadamente- se identificaban con el *menemismo*. Aceleradamente, la realidad probó que el predominio del *neoliberalismo* (otra etiqueta simplificadora, en tanto no sólo alude a una doctrina, sino a todo un proceso de reorganización capitalista) tenía raíces mucho más profundas que la corrupción o las obstinaciones ideológicas.

La oposición al presidente Menem fue deslizándose hacia una crítica ética y *politicista* a ese gobierno, mientras disminuía progresivamente la intensidad y profundidad de los cuestionamientos a sus medidas económicas y sociales. Al mismo tiempo que se privilegiaban planteos del arsenal clásico del liberalismo político (fortalecer las instituciones republicanas, ampliar la ciudadanía, respetar la efectiva división de poderes), se tendía a asumir cada vez más las reformas de Menem como medidas sustantivamente correctas, pero con una realización inadecuada, fruto de la preeminencia de intereses privados sobre la preocupación por el *bien común*. Los ataques al *menemismo* -definido por su estilo de gobierno más que por los rasgos centrales de sus políticas- sustituyeron a la formulación de alternativas de fondo al tipo de arreglo capitalista implantado en Argentina. Cuando en 1997 el Frepaso y la UCR pergeñaron su coalición opositora, ya comenzaban a postularse como autores de una segunda parte -*racionalizada* y moralizada- de las reformas estructurales de los '90.

La creciente conciencia a nivel internacional sobre lo que se percibe como *dogmatismo* neoliberal, sobre las reformas de mercado -aún ante sus malos resultados- y sobre la rigidez y falta de imaginación de los programas de ajuste preconizados por el FMI y otros organismos internacionales han dado pábulo recientemente a incipientes realineamientos en torno a muy moderados *tercerismos*⁴³ que permiten cuestionar el *pensamiento único* imperante y reconquistar un conveniente tono *anti-establishment* sin necesidad de cuestionar un ápice del imperio del mercado y la propiedad privada. En el caso argentino, los rasgos *patrimonialistas* de la administración Menem, la configuración de antielite⁴⁴ de muchas de sus conductas, la tendencia a visualizar las instituciones parlamentarias y judiciales como territorios a conquistar y dominar podían quedar atrás; y eso bastaba para un amplio sector social. Sin embargo, en los últimos tiempos del gobierno de Menem, y luego del cambio de gobierno de diciembre de 1999, se evidenció que el período marcado por las reformas estructurales y la política de estabilización había quedado atrás, y que sectores medios se enfrentaban al deterioro de ingresos y a la amenaza de perder sus empleos. La *modernización* de los '90 no había producido la prometida integración de Argentina al círculo de países capitalistas más ricos, ni siquiera había generado el marco para una prosperidad modesta pero estable; sino que había sido un interludio de ingreso masivo de capitales externos y auge del consumo que demostró carecer de sustentabilidad.

El consenso de los actores políticos y sociales más poderosos en torno a la necesidad de producir una *segunda generación* de reformas del aparato estatal -esta vez dirigidas más al interior del Estado subsistente que a la *retirada* de ciertos ámbitos de actuación (aunque esto no excluyese realizar nuevas privatizaciones)- no se ha modificado pese al empeoramiento de la situación económica general y de las finanzas estatales. Ahora se pretende encarar la modernización educativa y del sistema de salud, la reforma del poder judicial y de los aparatos ligados a la *seguridad* y el *orden*, del sistema de previsión social y -más en general- el perfeccionamiento y modernización de la gestión estatal⁴⁵. De todos modos, estas formulaciones no apuntan a revertir en medida apreciable la distribución del poder social y del ingreso emergente de los drásticos *ajustes estructurales* realizados. Es más, en los nuevos planes siguen apareciendo propuestas de continuidad del ajuste para extenderlo a ámbitos que, hasta ahora, fueron relativamente menos afectados (estados locales, fuerzas armadas y de seguridad, universidades nacionales, poder legislativo y judicial, etc.) con el previsible resultado de nuevas pérdidas de puestos de trabajo y de aumento de la vulnerabilidad social. Al respecto, resulta ajeno a la lógica de esta *segunda generación* proponer políticas de integración social, de recuperación fuerte del nivel y la calidad del empleo, de fortalecimiento de las organizaciones sociales autónomas y propias de las clases subalternas. El ocasional énfasis puesto en fortalecer a la *sociedad civil* (básicamente entendida como un *tercer sector* que suplanta a un Estado

en retirada) suena demasiado a la prosecución -por vías diferentes a la privatización- del abandono que el Estado hace de responsabilidades asumidas como propias durante toda una época. Más bien, la realidad apunta a que la desorganización y las dificultades para la acción colectiva de las clases subalternas⁴⁶ tiendan a ser una consecuencia aceptada, cuando no un beneficio obtenido por las clases dominantes. Por su parte, la dirigencia política -incapacitada para ofrecer beneficios duraderos y tangibles a las clases subalternas- sólo mantiene en el plano retórico la exhortación a la participación popular y la ampliación de la ciudadanía, mientras en la práctica apuesta a la perversa construcción de una *governabilidad* sustentada en la reducción de grandes masas de la población a mero *electorado* pasivo, sólo convocable a la hora de pedirle el voto en medio de campañas electorales con predominio *electrónico*, sin movilización callejera y con propaganda realizada por profesionales y no por militantes.

Con todo, la evidencia de que las correcciones parciales fracasan rápidamente hace más dudoso el apoyo de esa amplia *franja media* de la que antes habláramos y que gradualmente se convierte en un ámbito de reclutamiento para movilizaciones crecientemente contestatarias, como las que se dan en torno a la educación pública, los salarios y la estabilidad de los trabajadores estatales, la supervivencia de los pequeños empresarios, etc. El consenso -pasivo pero eficaz- que en los primeros '90 tuvieron las políticas neoliberales fue deviniendo en un descontento cada vez más fuerte y que últimamente se expresa en las frecuentes exteriorizaciones de una protesta que ha sumado las demandas generadas por las ruinosas medidas adoptadas ante la crisis (el "corralito" financiero) y por las provenientes de la búsqueda de alternativas al desencanto político y al deterioro de la vida democrática (las asambleas populares, en primer lugar).

Los trabajadores y el conjunto de los sectores oprimidos o marginalizados quedan por fuera de este esquema, tienen dificultad para encontrar una articulación política autónoma y tienden a vincularse clientelísticamente con los aparatos partidarios o con un escepticismo antipolítico que denota descontento, pero no alcanza a convertirse en una búsqueda consecuente de alternativas. Sus viejas identidades políticas perdieron significado, su relación con el aparato estatal se alteró sustancialmente, pero su integración a nuevas organizaciones y la posibilidad de éstas para renovar identificaciones se halla aún en un grado incipiente.

VI. ¿Qué tipo de consolidación democrática?

La inviabilidad de la alternativa a la democracia que durante todo el período anterior no era otra que las dictaduras militares instaladas con amplio apoyo del gran empresariado local y las potencias hegemónicas a nivel mundial, y la derrota y la parcial destrucción de las principales amenazas para los sectores hegemónicos de la burguesía (el movimiento obrero de orientación combativa y clasista y las corrientes radicalizadas de capas medias que derivaron en la lucha armada) permitieron instalar cómodamente un régimen constitucional. El poder económico no sólo protegió sus intereses, sino que desde 1980 mejoró su participación relativa en la distribución de la riqueza⁴⁷, amplió desmesuradamente sus *oportunidades de negocios* mediante la desregulación y las privatizaciones y adquirió un poder indisputado en la esfera específicamente política, sin que otros actores con fuerza suficiente le sirviera de contrapeso. De este modo, se quebró -en favor del capital más concentrado- el *empate* que desde los '40 se mantenía en la distribución de bienes políticos y materiales en Argentina. La nueva situación posibilitó que gobiernos democráticos impusieran reformas globalmente coincidentes con los intereses de ese sector y que desde 1985⁴⁸ se orientaron a buscar un modelo de acumulación superador del sustitutivo de importaciones y mercadointernista y a mantener una ofensiva permanente sobre los derechos y el nivel de vida de los trabajadores.

A partir de 1991, el gran capital apoyó activamente⁴⁹ un plan de reformas que, mientras reestructuraba el aparato estatal y estabilizaba y liberalizaba la economía, profundizaba un cambio en las relaciones entre capitalistas y trabajadores claramente orientado a debilitar hasta su mínima expresión la capacidad de lucha y negociación de los últimos y a abrogar un conjunto de conquistas laborales que incluso abarcaban a las obtenidas antes del peronismo. En la *vereda de enfrente*⁵⁰, los trabajadores y su representación sindical perdían tanto su poder social como sus ventajas materiales, sin que, en general, ello desembocara en acciones contestatarias capaces de revertir la tendencia⁵¹.

En ese cuadro, hoy se conjuga una actividad política que ostensiblemente pretende limitarse a elites que se comportan como empresarios maximizadores de votos, sin más horizonte que triunfar electoralmente para ocupar la dirección del aparato estatal y proseguir con la *administración de lo dado*, resumida en el *cortejo* a los capitales por todas las vías posibles.

Cuando en diciembre de 1999 llegaron al gobierno, los partidos de la Alianza (UCR-Frepaso) intentaron aplicar medidas moralizadoras y de afianzamiento de la legalidad y las instituciones junto con políticas económicas del mismo signo que las implementadas por el gobierno anterior. Recurrían, así, a un diagnóstico sesgado del proceso argentino vivido en los '90 -según el cual, el problema del país pasaba básicamente por la ética de su dirigencia política y por el afianzamiento de las instituciones republicanas-; mientras aceptaba a las políticas en curso como una indispensable modernización cuyos ejes quedaban fuera de cuestión. El corolario de esta apreciación fue que se debía superar un conjunto de *excesos* -simplificadamente llamado *menemismo*- y que las reformas estructurales debían continuar profundizándose y -en la forzosamente reducida medida de lo posible- moralizarse y emprolijarse. Mientras el capitalismo concentrador y excluyente quedaba fuera de duda, el nuevo gobierno se postulaba -ya desde la campaña electoral- como autor de las reformas de *segunda generación*.

Sin embargo, ya no contaría con la unanimidad de las clases dominantes que, desde aproximadamente 1995, atravesaban por un conflicto que enfrentaba públicamente a *empresarios productivos* de la industria y del agro con empresarios de las finanzas y los servicios públicos a propósito de tasas de interés, tarifas y protección arancelaria que, en realidad, sólo eran la expresión

superficial de desacuerdos más complejos y de la falta de capacidad por trazar una estrategia desde el Estado. El nuevo gobierno tampoco contó con la tolerancia de la mayoría de la población hacia un estado de cosas que sólo prometía más y mayores privaciones. Terminado el efecto activador ocasionado por la conjunción de las privatizaciones, la detención del proceso inflacionario, el consiguiente aumento del consumo y la afluencia de inversiones favorecidas por el nuevo contexto de apertura y desregulación, el panorama económico favorable comenzó a revertirse hasta caer en un marasmo de difícil superación. El efecto conjugado de la recesión del mercado interno, el atraso cambiario que desfavorecía las exportaciones y facilitaba las importaciones, el endeudamiento creciente y la crisis fiscal persistente llevó al país al borde del derrumbe económico, en medio del creciente deterioro salarial y de tasas de desocupación que ascendieron hasta superar el 20%. La continuidad de la estrategia de desarrollo elegida (Plan de Convertibilidad incluido) y la modificación de las tácticas abusivas empleadas para consumirla fue una ecuación que no funcionó, y el nuevo gobierno apareció como una continuidad del anterior en sus aspectos importantes, con el agravante de haber pasado desde un conservadorismo frontal y decidido a otro irresoluto y con rasgos de inoperancia. Ello profundizó la crisis económica, ahora acompañada por una creciente crisis política.

Frente a esta crisis, los partidos *sistémicos* se quedaron sin discurso eficaz y sin medios de acción en un marco político en el que, en más de un sentido, *cogobiernan* oficialistas y opositores. La renuncia del presidente electo por el sufragio popular, y su reemplazo hasta el término del mandato por uno elegido por las cámaras legislativas, fruto de un acuerdo entre las fuerzas mayoritarias, ha acentuado esa imagen de co-gobierno impermeable a los resultados electorales. Ello dio lugar a una desorganización político-partidaria cuya duración aún no se puede determinar, pero que favoreció el establecimiento y quiebre de alianzas, las permanentes disidencias partidarias y un escenario en general muy fluido. Han aparecido nuevas fuerzas políticas centradas en torno a líderes carismáticos (sobre todo el ARI -Alternativa por una República de Iguales-, encabezado por la diputada Elisa Carrió) con difusas promesas de satisfacción de las necesidades populares más inmediatas, moralización de la vida pública y democratización más efectiva de las estructuras políticas, que tienden a reproducir las promesas *progresistas* frustradas por la Alianza en su decurso.

Mientras tanto, en amplísimos sectores sociales se ha desatado un fuerte clima de descontento globalmente *antipolítico* que tiende a descartar a todo el arco ideológico-partidario bajo la común acusación de corrupción, ineptitud y desinterés por los reales problemas de la población. La consigna *¡Qué se vayan todos!* -que alude, sobre todo, a la dirigencia política- se repite hasta el cansancio en las manifestaciones callejeras. Un importante sector de la elite ligada al poder económico se sumó activamente a esta tendencia al desprestigio haciendo valer su influencia en los medios y parece decidida a profundizar -al parecer, sin una alternativa clara- en el desprestigio de los políticos y los partidos, sin que quede en evidencia el tipo de mediación que podría reemplazarlos. Sin embargo, es el sentido de protesta popular contra un orden injusto el que tiende a prevalecer hasta ahora en la interpretación de esta consigna⁵².

El cuestionamiento a la dirigencia política y a los partidos es tan fuerte y tan amplio (en tanto, casi no admite excepciones) que las propuestas de *reforma política* circulantes desde hace tiempo no parecen aptas para revertir esa situación. Las medidas que suelen propiciarse para hacer más transparente el financiamiento de los partidos, cambiar el régimen electoral y la organización de las listas, facilitar la creación de nuevos partidos y la presentación de candidatos independientes no atacan la problemática de fondo originada en una estructura social radicalmente injusta y en la concentración de todas las dimensiones del poder; y esto, sin mencionar a aquellas propuestas que sólo parecen pretender trasladar la lógica del ajuste a las instituciones políticas, reduciendo cargos electivos y otros considerados *políticos*, pasando de sistema bicameral al unicameral, etc. Bajo la cobertura de la omnipresente lógica de reducción de *costos*, parece que se intenta profundizar la tendencia a *tecnocratizar* y a desvincular de la voluntad ciudadana la toma de las decisiones importantes, ya que la demanda de *menos políticos y más técnicos* suele acompañar a la *fiscalización* del problema. En definitiva, las actuales propuestas de reforma que se centran en el régimen electoral y en el sistema de partidos tienden a mantener e incluso a agravar las causas más profundas de toda la problemática.

En tanto, el principal ámbito social que parece capaz de proveer una calidad de dirigencia diferente al contexto de decadencia social y degradación progresiva de la vida política es el de los movimientos formados en la resistencia a las variadas formas de barbarie que el poder desplegó en los últimos veinticinco años. Estas organizaciones populares podrían jugar un papel fundamental en la reconstrucción desde abajo de formas de democracia destinadas a producir mayores niveles de igualdad y de libertad positiva. Sobre todo cuando, desde diciembre de 2001, el grado de visibilidad del descontento popular y la posibilidad de proporcionarle mayor cauce organizativo a través de los movimientos piqueteros y de las asambleas populares que dieron un salto cualitativo tras la movilización masiva y el clamoroso hartazgo ante el agravamiento de la crisis que forzaron la renuncia del presidente y su ministro de Economía⁵³. Este salto tiene una dimensión particularmente importante ya que gran cantidad de personas han ingresado (o reingresado tras mucho tiempo) en la escena política y abandonado el rol de sujetos pasivos que se informan por los medios de lo que ocurre, para pasar a ser protagonistas de lo que sucede. La avalancha de cortes de ruta, cacerolazos, escraches, creación de asambleas, ocupación de espacios antes privados para el uso público, etc. habla de una presencia masiva en las calles⁵⁴, que cierta politología (al uso) había enseñado a pensar como cosa del pasado⁵⁵.

Sobre ese sustrato de movilización, se afirman múltiples experiencias organizativas que no responden al esquema de fuerzas anteriores (instituciones públicas, partidos, sindicatos, *movimientos sociales*, ONGs), sino que insinúan otra lógica: a menudo no dirigen sus reclamos al aparato estatal, no responden a los partidos ni a los sindicatos tradicionales y su pensamiento y sus prácticas no resultan asimilables a las ideologías y tradiciones políticas conocidas. Asimismo, parecen tener una potencia nueva, una gran capacidad para agrupar y movilizar al heterogéneo resultante social de las transformaciones ocurridas en el último cuarto de siglo.

En ese cuadro parece dibujarse la necesidad de proyectos que, de algún modo, puedan apuntar a conjugar partidos políticos no

asimilados a la actual modalidad representativa, organizaciones obreras no burocratizadas y movimientos sociales no tradicionales dispuestos a superar el plano económico-corporativo para pasar a la actividad política propiamente dicha. La disposición a cuestionar al unísono al capitalismo monopólico y a la *democracia realmente existente* sin vacilar ante las coyunturas desfavorables, junto con la capacidad para generar modos de organización profundamente democráticos que no reproduzcan los modos de selección de líderes y de toma de decisiones del sistema político aún imperante, pueden ser la base de un combate con perspectivas de éxito contra las múltiples tendencias a la absorción que el sistema despliega frente a cualquier cuestionamiento. Creemos que allí se juega la recuperación del sentido de *gobierno del pueblo* del régimen democrático. El hastío ante una institucionalidad democrática que no da respuestas a ningún problema importante, el creciente distanciamiento de una dirigencia a la que se visualiza como ineficiente y corrupta, la recuperada confianza en la posibilidad de movilización y lucha -que incluye la capacidad de obtener ciertos triunfos- favorecen, indudablemente, un renacer de la movilización de masas, en niveles que no se alcanzaban desde los ya lejanos 1973/74.

El fenómeno más destacado es el crecimiento del nivel de organización y movilización de las organizaciones populares de nuevo tipo ligadas, en gran parte, a los fenómenos de desocupación y pobreza, y que desarrollan métodos de lucha no tradicionales, como los *cortes de ruta* que en los últimos años han sido un componente en ascenso del paisaje social de todo el país⁵⁶. Esas organizaciones tienden a evolucionar de tres maneras diferentes: a) Fusionándose con el movimiento obrero tradicional, a través de la formación de agrupaciones y federaciones que se afilian a las centrales obreras (Federación de Tierra y Vivienda a la CTA, Corriente Clasista y Combativa a ciertas líneas de la CGT). b) Manteniendo una acentuada autonomía que lleva a las respectivas agrupaciones de trabajadores desocupados a no mantener vínculos orgánicos con ninguna organización fuera de su campo; tal el caso de (los) MTD (Movimientos de Trabajadores Desocupados). c) Estableciendo una relación de subordinación, informal pero fuerte, con alguna organización política de orientación radicalizada.

En principio, todas esas modalidades parecen compatibles con el avance hacia mecanismos de articulación con sectores representativos de otras clases sociales que amplían el espacio de la protesta (sectores de capas medias golpeados por la crisis, movimientos de DDHH, organizaciones de profesionales, agrupamientos de intelectuales, movimientos estudiantiles, organizaciones de pequeños productores y empresarios). Los movilizados, tengan o no trabajo, asumen la identidad de trabajadores (desocupados en el segundo caso); lo que suele combinarse con modalidades organizativas de base territorial que, junto con el reclamo de puestos laborales o subsidios para la desocupación, levantan reivindicaciones ligadas a la ocupación de tierras o edificios para vivienda o para uso comunitario.

De todos modos, este retorno a la organización y a la movilización y la gradual recuperación de la idea de participación *permanente y organizada* en la vida política está en la base de una puesta en crisis del modelo de democracia meramente procedimental, basado en un consentimiento pasivo y resignado que tiene como fondo una siempre presente amenaza de represión. Todo ello implica una revitalización de la idea de democracia como *gobierno del pueblo* que tiende a rebasar los márgenes de una representación política modelada para neutralizar a las clases subalternas, y a desacatar los estrechos límites impuestos por la *governabilidad*. Nada de esto puede desvincularse de la idea de que una sociedad mejor es posible, de que no es justo ni aceptable que la explotación, la marginación y la alienación presidan las relaciones humanas.

VII. A modo de conclusión. Las posibilidades de una nueva democracia

La adopción de la idea de construir una *democracia* diferente a la actualmente existente (llamada representativa, parlamentaria, liberal, según quien la analice) fue un tema delicado durante mucho tiempo. Ya avanzado el siglo XX, el término democracia había logrado un nivel de aceptación tal que casi no hubo régimen que no quisiera cubrirse con el manto de legitimidad que la palabra otorgaba, aunque la distorsionara o la suprimiera en su práctica cotidiana. Criticar a la democracia representativa conllevaba el riesgo de aparecer próximo a propuestas autoritarias y regresivas.

Sin embargo, hoy se vislumbra -sobre todo en el mundo periférico (y en particular en Latinoamérica)- una crisis radical en las democracias representativas. En su defensa suele utilizarse un chantaje ideológico que da a elegir entre esta democracia o una dictadura. Como todos sabemos, en América Latina dictadura significa anulación de todas las libertades, supresión de toda forma de participación popular, persecución a cualquier oposición más o menos activa, empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad.

Pero esa apelación a la falta de alternativas realmente democratizadoras pierde eficacia a la vista de que las elecciones periódicas y un aceptable nivel de vigencia de las libertades públicas no impiden la concentración brutal de la riqueza, el empeoramiento de las condiciones de vida de las grandes masas, e -incluso- la pérdida de efectividad de la institucionalidad democrática frente a poderes *fácticos* internos y externos que exhiben un casi ilimitado poder para diseñar la agenda pública y una amplia capacidad de presión o veto cuando alguna decisión amenaza a sus intereses o propósitos. Otro hecho que debilita la amenaza dictatorial es que, en el caso argentino, el desprestigio de las Fuerzas Armadas ocluye el retorno a una dictadura; al menos, en sus versiones más o menos *clásicas*.

Por otra parte, el voto ciudadano pierde importancia ante la certidumbre de que es el gran capital quien terminará imponiendo las decisiones por vía directa o a través de los organismos internacionales, de los grandes medios de comunicación o del entramado económico, político y cultural que le responde. De este modo, se ha vuelto de hecho, aunque no de derecho, al diseño original de los regímenes representativos pre-democráticos donde los principios liberales regían la vida pública, pero las decisiones políticas las tomaba la minoría de poseedores de capital. En el actual capitalismo internacionalizado, los centros decisorios se alejan a miles de kilómetros de las instituciones formales, fuera del territorio nacional y lejos del alcance y del conocimiento del *pueblo* que

supuestamente gobierna.

Pero cuando es demasiado evidente que el gobierno no es ni remotamente *del pueblo*, sino de una minoría de poderosos, las instituciones del gobierno representativo pierden toda credibilidad. En ese marco -y ante la profunda crisis social, económica y política-, las elites gobernantes y los partidos políticos vuelven a optar por los intereses de las clases dominantes. Esta actitud aumenta el descontento y la protesta activa contra la totalidad del poder político, el cual -a su vez- busca legitimarse con el apoyo de la gran empresa y de los organismos financieros internacionales, creando así un circuito sin salida⁵⁷.

Ante este ostensible derrumbe del componente de la soberanía popular en los regímenes actuales y ante la pérdida de legitimidad de partidos políticos que ya no pueden reflejar demandas proveniente del *abajo* social, se hace imperativo pensar (y actuar) un cambio radical de la democracia realmente existente. Para hacerlo, hay que superar una de las falsedades esenciales del chantaje arriba descrito: los derechos, libertades y garantías ciudadanas no están fatalmente asociados a las formas representativas parlamentarias, tienen un origen histórico diferente y cubren distintos aspectos de la vida social. La transformación de la representación parlamentaria no tiene por qué comprometer la existencia de amplios derechos individuales y colectivos, incluyendo la libertad de expresión y asociación en un lugar destacado; ni a su tutela judicial sustentada en el principio de legalidad como base de funcionamiento de las instituciones. Al contrario, un proceso de democratización radical debería conducir necesariamente a ampliar esas libertades, tanto en su extensión jurídica, como -principalmente- en la creación de condiciones efectivas para que puedan ejercerlas los miembros de las clases subalternas.

Entendida la preservación y ampliación de las libertades ciudadanas como parte esencial de un programa de democratización radical, su eje fundante no puede ser otro que el reemplazo del imperio de lo indirecto, de lo mediatizado, de la sedicente *libertad* del representante frente a los representados, y la abolición de todas las restricciones a la libre organización y expresión popular.

Pero ¿cuáles serían los mecanismos de reemplazo? En primer lugar, los básicos para contrarrestar mediatizaciones que separan tajantemente a *gobernantes* de *gobernados*. Entre ellos, mandatos imperativos y revocables; asignación de los cargos electivos en proporción directa a los votos obtenidos, sin mecanismos que distorsionen esa proporcionalidad; responsabilidad y dependencia directa de los órganos ejecutivos frente a los de representación popular; amplia posibilidad de iniciativa popular en las decisiones locales, provinciales y nacionales; mecanismos de control popular sobre los servicios públicos, incluyendo la educación, la salud; control del sistema financiero, del dictado y la ejecución de los presupuestos estatales de los diferentes niveles, de los precios, del abastecimiento y de la calidad de los productos comerciales, de la incorporación del personal de todos los niveles en la dirección de las organizaciones públicas y privadas, incluyendo las empresas capitalistas. Y por cierto, un cambio en la cúspide del sistema institucional que termine con la concepción unipersonal y presidencialista de la jefatura de estado y de gobierno.

Son éstas, sólo algunas de las medidas que, en una aplicación seguramente gradual, podrían ir dando forma a una democracia que tienda a la inmediatez de la injerencia popular en todos los niveles de gobierno, a contrarrestar la *profesionalización* de los funcionarios electivos, a dificultar la *autonomización* de los representantes respecto de los representados, a la construcción activa de poder para las organizaciones populares. El conjunto contribuiría a restringir la posibilidad de convertir en poder político el dominio construido en la economía, los medios de comunicación privados o cualquier terreno colocado por fuera del control popular y a re-acercar el sentido etimológico del término *democracia* con la idea de un ejercicio efectivo de la soberanía del pueblo.

(*) El autor es abogado, administrador gubernamental y profesor de Teoría del Estado en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

1 También se relacionan con esta visión procedimental las concepciones de la democracia que la consideran como una suerte de proyección al plano político de los mecanismos de libre mercado, en la línea de Joseph Schumpeter en su *Capitalismo, socialismo y democracia*, caps. XXII y XXIII.

2 Un fundamentado ataque, desde el punto de vista de su concepción filosófica, de la democracia como procedimiento, se encuentra en Castoriadis. cf. Castoriadis, C. "La democracia como procedimiento y como régimen" en *El avance de la insignificancia*, Eudeba, 1997. A partir de la imposibilidad de disociar igualdad y libertad, llega allí a afirmar no es posible realizar una 'democracia procedimental' que no sea un fraude.

3 Sábato, H. "¿Democracia en agonía?", en *Punto de Vista*, Año XXV, N° 72, abril 2002, p. 42.

4 La evolución del desempleo en las últimas dos décadas marca el tránsito desde una situación de virtual pleno empleo a los más elevados porcentajes de trabajadores desempleados en la historia del país. La desocupación era de 2.6% en 1981 y 4.8% en 1982- En 1989 7.6%, 1993, 9.6%, 1994, 11.5, y 1995, 17.4, 1996, 17% (Artículo de Claudio Lozano, Página 12, abril de 1996). Desde esos niveles, ha tenido un incremento que la sitúa en octubre de 2001 por encima del 18% y en mayo de 2002 sobrepasando el 21%.

5 En 1995 la proporción de hogares pobres registró un aumento de un 24% revirtiendo la tendencia al descenso desde 1989 (año que marcaba un punto altísimo, en medio de la crisis hiperinflacionaria). En 1995 se estimaba en un 21% el porcentaje de hogares del G.B.A que se encontraba por debajo de la línea de pobreza, en tanto que un 15,3 tenía sus necesidades básicas insatisfechas. Esto se potencia con el abandono de las políticas sociales universales y su reemplazo por el gasto social focalizado. Cf. Svampa, Maristella y Martuccelli, Danilo, *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*, Losada, 1997: 43). Las cifras que parecían terribles hace seis o siete años, tuvieron algún retroceso en 1996-1997 y volvieron a remontar hasta la actualidad, cuando se

calcula que más de la mitad de los menores del país se hallan viviendo bajo la línea de pobreza.

6 Refiriéndose al conjunto de los países latinoamericanos que experimentaron procesos de ajuste estructural, Acuña y Smith señalan: El proceso de la reforma estructural condujo al surgimiento de democracias con una gran concentración del poder en el Ejecutivo y la exclusión de los sectores populares de la formulación e instrumentación de las medidas sociales y económicas (...) Otra consecuencia del proceso fue la desarticulación de los actores sociales, en particular los de sectores subalternos. Acuña, Carlos y Smith, William C. "La economía política del ajuste estructural: la lógica de apoyo y oposición a las reformas neoliberales" en *Desarrollo Económico*. Revista de Ciencias Sociales. Abril-Junio de 1996. Vol. 36. Nº 141, p. 357.

7 Vale la pena citar aquí los tempranos escritos de Gramsci en *La Città Futura*, acerca de la fuerza conservadora de la idea-fuerza que anima al estado liberal: Como idea-limite el programa liberal crea el estado ético, un estado que idealmente está por encima de la confrontación de clases, del entrelazamiento y choque de los agrupamientos, de la realidad económica y tradicional. Es una aspiración política de este estado, más que una realidad política; existe sólo como modelo utópico, pero es precisamente su carácter de espejismo el que lo robustece y lo convierte en una fuerza de conservación. En la esperanza de que esto se realiza finalmente en su completa perfección, muchos encuentran el motivo para no rechazarlo, y no tratar de sustituirlo por otro. (Come idea-limite il programma liberale crea lo stato etico, uno stato cioè che idealmente sta al disopra delle competizioni di classe, del vario intrecciarsi ed urtarsi degli aggruppamenti che ne sono la realtà economia e tradizionale. E' un' aspirazione politica questo stato, più che una realtà politica; esiste solo come modello utopistico, ma è appunto questo suo essere un miraggio che lo irrobustisce e ne fa una forza di conservazioni. Nella speranza che finalmente esso si realizzi nella sua compiuta perfezione, molti trovano la forza per non rinnegarlo, e non cercare quindi di sostituirlo) Gramsci A. "Tre principii, tre ordini" en *La Città futura*, numero unico publicado por la Federación juvenil socialista piemontesa, 11 febrero de 1917, compilado en *Scritti Giovanili*, Einaudi, 1958, p. 73-78. (Párrafo traducido por el autor).

8 Uno de los análisis más penetrantes de este operativo de re-disciplinamiento de las clases subalternas sigue siendo el de: Adolfo Gilly "La anomalía argentina (Estado, corporaciones y trabajadores)" en Pablo González Casanova (coordinador) *El Estado en América Latina. Teoría y Práctica*. UNU-Siglo XXI, México, 1990.

9 Nos referimos a que, en Chile, la derecha "pinochetista" logró constituirse en una fuerza política que ha disputado la presidencia de la Nación, con posibilidades de éxito, desde el comienzo de la restauración democrática hasta la actualidad.

10 Mabel Thwaites Rey se refiere a lo vivido en los últimos años como... una verdadera estrategia político-económica que resitúa las bases de la dominación social, define nuevas formas de legitimación-deslegitimación estatal, implica un cambio profundo de las fronteras entre el estado y la sociedad y de los vínculos entre los distintos grupos, clases y actores sociales que se habían configurado durante largas décadas en la Argentina. Thwaites-Rey, Mabel, "Ajuste estructural y reforma del estado en la Argentina de los 90" en *Realidad Económica*. Revista del Instituto Argentino de Desarrollo Económico, Nro. 160/161, noviembre 1998/febrero 1999, p. 77.

11 Hirsch, Joaquim, *Globalización. Transformación del Estado y Democracia*. Córdoba, 1997, p. 27.

12 Hirsch, J. op. cit.: 28-29.

13 F., Campione, Daniel, "El Estado en Argentina, sus condiciones actuales" en *América Libre*, nº 12, diciembre de 1997.

14 Una de las versiones que más ha circulado de este enfoque se encuentra condensado en Osborne, David, "Reinventando el gobierno", en *Aportes para el Estado y la Administración Gubernamental*, Año 3, Nº 6, otoño 1996.

15 Nun, José, *Marginalidad y Exclusión Social*, FCE, 2001, p. 299.

16 Przeworski, Adam, *Capitalismo y Socialdemocracia*, Alianza, 1988.

17 A favor de este abordaje integrado de la crisis específica de representación, se pronuncia entre otros Hilda Sabato, en un comentario sobre la crisis de los últimos meses. cf. Sabato, H. "¿Democracia en agonía?" en *Punto de Vista*, citado.

18 A partir de 1990, ya es larga la lista de presidentes que, en toda América Latina, han sido destituidos por diversos mecanismos, muchas veces previo estallido de vastas protestas populares, desde Collor de Melo a Fujimori y de la Rúa. Cada vez son más frecuentes las rebeliones masivas contra decisiones impopulares o contra toda una gestión de gobierno (como se ha visto, para citar los casos más recientes, en Perú este mismo año 2002, frente a medidas privatizadoras, o en las reiteradas protestas campesinas e indígenas de Bolivia y Ecuador), y los derrumbes, electorales y organizativos de partidos políticos con décadas de vigencia y la aparición de nuevos movimientos que logran amplio apoyo.

19 Véanse, con matices entre sí, los ensayos incluidos en AAVV. *Peronismo y Menemismo*, El Cielo por Asalto, 1994.

20 Entre otros análisis de este aspecto de la llamada globalización se encuentra el de John Holloway, en *Un capital*, muchos estados, revista *Aportes para el Estado y la Administración Gubernamental*. Año 1. Nº 1. Otoño 1994.

21 En un balance sobre las medidas implementadas por el Proceso de Reorganización Nacional para desmontar el poder sindical, Juan Alemann, quien fuera secretario de Hacienda del dictador Jorge Rafael Videla, enumeraba la atomización de los sindicatos, la reducción de la concentración de personal en las grandes empresas, el crecimiento de las ramas de servicios en detrimento de la industria, y del personal técnico y calificado en relación al más propiamente obrero, como otros tantos éxitos en esa tarea. Alemann, Juan, "Los sindicatos y el poder" en La Nación del 9 de abril de 1987, citado por Nun, José "Cambios en la estructura social argentina" en Nun, J. y Portantiero J. C, Ensayos sobre la transición democrática en Argentina. En cuanto a la subversión armada, ya estaba derrotada militarmente al comenzar la dictadura, y su poder de fuego siempre fue mucho más reducido que el que pretendían hacer creer los militares. Cf. Vezzetti, Hugo Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina. Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, p 55 y 56.

22 Durante la dictadura militar, la acción del estado en orden a desorganizar a las clases subalternas y al mismo tiempo reorganizar a las clases dominantes, alcanzó un grado de explicitación e intensidad muy elevado. Mientras se propendía a suprimir definitivamente a la CGT y a cualquier central sindical, desde el gobierno se actuaba para facilitar la reorganización de la Unión Industrial Argentina luego de dejar sin efecto su fusión con la CGE, central empresaria que había quedado asociada a la subversión y la corrupción.

23 Borón, Atilio. "Las promesas incumplidas de la democracia" en AAVV.en Izquierda, Instituciones y Lucha de Clases, sin mención de editorial, 1998, p. 44.

24 Debe recordarse que ningún presidente constitucional terminaba su mandato desde la primera presidencia del general Perón finalizada en 1952, y que jamás en la historia argentina un presidente emanado de elecciones libres había traspasado el mando a uno de otro partido, también elegido mediante el sufragio universal en condiciones de limpieza.

25 El término aceptable no implica valoración positiva de nuestra parte sino la comprobación de que las condiciones de libertad de expresión, asociación, reunión, etc. no son sustancialmente peores que las imperantes en la mayoría de las democracias realmente existentes, incluyendo algunas de las más avanzadas.

26 En realidad, la posibilidad de escoger entre opciones previamente configuradas por poderes superiores se ha proyectado desde las elecciones a la cotidianeidad por vía del desenfrenado auge de la encuestología, siempre atenta a pulsar la opinión pública sobre elecciones futuras y acerca de la imagen de los posibles candidatos, lo que a su vez encuentra una repercusión de primer orden en los medios. La expresión de la opinión siempre armada sobre preguntas cerradas reemplaza así las posibilidades de decisión efectiva.

27 Cf. Nun, José, op. cit. p. 297.

28 Con el término renuncia aludimos aquí a la creciente tendencia a la abstención electoral y al voto en blanco que se registra en las elecciones nacionales y que en los comicios a convencionales constituyentes de 1994 llegó al 34,9% del padrón, si se suman ambos índices, ocupando el segundo lugar a nivel nacional y el primero en algunas provincias. De todos modos, el votoblanquismo y la abstención no evolucionan linealmente. Pero en las elecciones parlamentarias de octubre de 2001, estas tendencias, y la muy llamativa emisión masiva de votos nulos de variadas características (fotografías de próceres, boletas con inscripciones insultantes, personajes de historietas, etc.) llegaron a la cima.

29 Escribe Vilas: ...en el mismo momento en que se consolida el discurso sobre la autonomía del sistema político respecto de sus bases estructurales, la política se vincula e identifica con la preservación de una determinada configuración estructural- el sistema capitalista realmente existente en un país dado, y por lo tanto, con una específica dominación de clase. Carlos M. Vilas, "La Izquierda en América Latina: Presente y futuro (Notas para la discusión)" en La invención y la herencia. Cuadernos Arcis-Lom Num. 4/ Noviembre-Diciembre 1996, Santiago de Chile: 268. En efecto, la contradicción es chirriante, mientras más se profundiza el diktat de las necesidades de la acumulación capitalista sobre las instituciones estatales, la corriente principal de las ciencias sociales y el pensamiento político se empeña cada vez más en desvincular economía y política en sus análisis.

30 Este término ha tenido singular fortuna en los últimos años. Pretende designar a aquéllas decisiones de supuesto alcance estratégico, ligadas al interés nacional y, por tanto, excluidas de cualquier puja ideológica y partidaria. Se advierte una tendencia creciente a colocar más y más temas, tanto de política exterior como local, bajo ese paraguas que tiende a empobrecer aun más el debate político, y a reforzar la deslegitimación de toda propuesta transformadora

31 Nos referimos con normalización a las circunstancias en que las distintas fuerzas aceptan a la democracia como el único juego político posible. Una buena descripción la proporciona Daniel García Delgado: ...el régimen representativo que se constituía en la fase democrática del ciclo cívico-militar no es similar al que se constituye con posterioridad a la última dictadura, ya que, mas allá de funcionar con similares instituciones, la difusión de valores asociados al pluralismo, la mayor competencia y el impacto de la globalización van a provocar una transformación de este régimen político, produciendo el pasaje del modelo "movimientista" (democrático popular) al democrático liberal. García Delgado, Daniel, op. cit, p. 109.

32 Auyero, Javier (comp.) ¿Favores por votos? Estudios sobre clientelismo político contemporáneo, Losada, 1997, Introducción, p. 18.

33 Auyero, Javier "Evita como performance. Mediación y resolución de problemas entre los pobres urbanos del Gran Buenos Aires"

34 Ver Vilas, Carlos M. "De ambulancias, bomberos y policías: La política social del neoliberalismo" en Desarrollo Económico, vol. 36, Nº 144, enero-marzo 1997 p. 931 y ss. Allí el autor compara las políticas sociales focalizadas (por oposición al modelo universalista anterior), desvinculadas de cualquier concepto de desarrollo social, con ...la ambulancia que recoge a las víctimas de la política económica.

35 La figura del 'puntero' (denominación de prosapia radical y conservadora, pero sin una sólida tradición en el peronismo, comentario nuestro) se ha convertido en el intermediario indispensable entre jefes políticos y clientes en el peronismo de los 90. (cf. Auyero, 1997, p. 169).

36 Cf. Daniel R. García Delgado. Estado & Sociedad. La nueva relación social a partir del cambio estructural. FLACSO, Tesis-Norma, 1994, pp. 124 y ss. En los últimos años del menemismo, algunos dirigentes y funcionarios de cierto peso (Claudia Bello, secretaria de la Función Pública, fue el caso más sonado), confesaban abiertamente que vivían de la política, y que pensaban seguir haciéndolo, y hasta alguno llegó a lamentar la falta de una formación universitaria que le permitiera buscar mejores horizontes laborales.

37 M. Thwaites-Rey apunta certeramente al problema que significa ese escepticismo, como expresión de una ajenidad respecto al sistema político: ...es imprescindible no perder de vista que los altos niveles de "percepción de ajenidad" respecto al sistema político y la crisis de representatividad de quienes lo encarnan no tienen como correlato necesario una adecuada maduración del "espíritu de escisión" del que hablaba Gramsci, ni supone automáticamente un salto cualitativo en la capacidad de organización autónoma de las clases subalternas. (M. Thwaites-Rey, "Sobre la política expulsada y la irrupción plebeya" en Actuel Marx, julio 2001, edición argentina, p. 240.

38 Es plenamente aplicable al caso argentino lo que un autor ecuatoriano afirma para Latinoamérica en general: Desde los círculos de los poderes transnacionales y nacionales, a lo largo de la década de los noventa, se ha tratado de imponer a los movimientos populares una sola visión de lo político, las teorías de la gobernabilidad, y una agenda impuesta desde organismos como el Banco Mundial, que los vuelve funcionales a la contrarreforma del Estado, articulados a los denominados procesos de descentralización y autogestión, renunciando a tener una perspectiva total y emancipadora del futuro. F. Hidalgo, "Movimientos Populares. El debate de alternativas" en Dora Kanoussi (ed.) Gramsci en América, Universidad de Puebla, 2000, p. 60.

39 Los tres primeros años de vigencia de la política conocida como Plan de Convertibilidad, tuvieron cifras contundentes de crecimiento. El PBI tuvo un incremento de 8,9% en 1991, 8,7% en 1992, y 6% en 1993. Ello era una novedad en un país que, desde la década del 70', sólo por excepción había tenido años de crecimiento superior al 5%.

40 Con respecto a la convertibilidad monetaria, el proceso fue gradual, pero de claridad meridiana. De augurar su caída catastrófica, se fue pasando a la apelación a la necesidad de salir de la convertibilidad en algún momento próximo, hasta llegar a la aceptación de la convertibilidad como intangible, como un bien en sí mismo del que dependería el bienestar de los argentinos. La campaña para elecciones presidenciales del Dr. De la Rúa tuvo una de sus apelaciones centrales en la consigna un peso, un dólar.

41 Pucciarelli, A. "El régimen político argentino a fines de la década: ¿democracia impotente o cómplice?, en Sociedad. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Nº 16, Noviembre 2000, Buenos Aires, p. 101.

42 La conjunción de ambas fuerzas es denominada Alianza, a secas, como señalando su carácter de coalición como valor fundamental (casi nunca se recuerda su nombre completo, Alianza por el trabajo, la educación y la justicia. Al escribirse este artículo, la Alianza ha concluido su ciclo, la UCR se encuentra en una profunda crisis, y no está claro si la otra fuerza, el Frepaso, podrá preservar su existencia. Queda así confirmada la afirmación de M. M. Ollier, una politóloga que ha estudiado el tema muy recientemente, en cuanto al carácter más bien trunco, poco experimentado y generalmente sinuoso... de las coaliciones en América Latina, con la excepción única de Chile. M. M. Ollier, Las coaliciones políticas en la Argentina. El caso de la Alianza. F.C.E., Bs. As., 2001, p. 161.

43 La idea de la tercera vía, intermedia entre el neoliberalismo y la socialdemocracia tradicional, tomó inusitada (y efímera) popularidad entre los políticos argentinos de oposición, ansiosos de encontrar una cobertura que les permitía aparecer en la cresta de la ola en cuanto a las novedades circulantes, a despecho de la extrema pobreza de sus propuestas efectivas. Muchos de ellos se plegaron al vocabulario tipo tercera vía aún antes de acceder a ninguna conceptualización sobre la misma (que llegó más tarde, con el libro de Anthony Giddens titulado justamente La tercera vía).

44 Sidicaro, Ricardo op. cit.: 126 y ss.

45 Aproximadamente en estos términos define Oscar Oszlak la reforma del Estado en "De menor a mejor. El Desafío de la 'Segunda' Reforma del Estado" en Nueva Sociedad, Nº 160, Marzo-Abril, 1999, Caracas.

46 Afirma Aldo Isuani en un trabajo reciente: Hoy, los excluidos carecen de condiciones para actuar colectivamente: son básicamente desempleados, cuentapropistas instalados en un contexto que les impide organizarse para la acción (...) Esto termina generando una contradicción entre incluidos y excluidos: se acaban los intentos de los incluidos por representar a los excluidos y aparecen síntomas de segregación y exclusión. E.A.Isuani, "Situación social argentina. Algunas tareas pendientes" en Aportes para

47 Acuña, op. cit. 1993: 33.

48 De junio de 1985 en adelante, el radicalismo se mostró capaz de ser permeable a la participación de los capitalistas y sus organizaciones en el proceso de toma de decisiones, así como de implementar estrategias que apuntaban a la solución de la crisis del 'viejo' modelo de acumulación en una dirección funcional a intereses empresariales de gran peso: apertura de la economía, privatizaciones, enfrentamiento con el poder sindical y disminución del poder del estado como productor y asignador de recursos ya no fueron objetivos monopolizados por los tradicionales partidos de derecha o las FFAA. Acuña, Carlos, Lucha política y organizaciones empresariales de cúpula: Algunos apuntes teóricos con referencias al caso argentino. CEDES, 1992.s)

49 Ese apoyo generado por el Plan Cavallo, se mantuvo muchas veces por una confianza general en los resultados del modelo, más allá de perjuicios económicos puntuales, como en el caso de buena parte de la burguesía industrial. En ciertos casos, hay mecanismos que compensan ampliamente, dentro de la lógica de las reformas, la pérdida de beneficios existentes en la etapa anterior. Así, para muchos grupos económicos, el cierre del mercado de contrataciones estatales ha sido compensado por la posibilidad de acceder a la propiedad de las empresas privatizadas. Los posteriores cimbronazos, sobre todo a partir de 1994, aniquilaron la confianza en un horizonte de crecimiento sostenido y prosperidad por derrame de los sectores menos privilegiados, pero aumentaron la sensación de que sólo el régimen de convertibilidad separaba a la sociedad argentina de un retorno al descontrol. Cuando las crisis comenzaron a repetirse en las geografías más disímiles, y abarcando inclusive a algunos de los NICs (países de nuevo desarrollo) como Corea, Malasia e Indonesia, vistos como los más tempranos y sólidos ejemplos de incorporación de países del Tercer Mundo al círculo de la prosperidad, la incertidumbre no hizo sino aumentar. Esto se refleja en el disciplinamiento de la oposición política a la convertibilidad, luego de unos primeros años en que presagiaban el derrumbe del esquema o al menos la necesidad de salir de él para terminar con sus restricciones.

50 La metáfora de las veredas fue utilizado reiteradamente por el presidente Menem, con la intención de relegar a sus críticos a un frente que tendía a identificarse con el atraso y la falta de adaptación a las exigencias de la modernidad.

51 Cabe aquí la advertencia contra la asociación mecánica entre empeoramiento de la situación económica y el aumento de la conflictividad social y política, no por reiterada menos necesaria. El debilitamiento de los actores sociales potencialmente opositores y la adopción de estrategias individuales, no políticas, inducidas -a su vez- por los crecientes costos de la acción colectiva, se conjugaron durante los primeros '90 para que no hubiera crecimiento del nivel de conflicto social.

52 En esta dirección va, nos parece, un comentario de R. Sidicaro sobre la cuestión: Si la consecuencia de las protestas fue el incremento de la desintegración del reconocimiento y de la legitimidad de las instituciones estatales y los partidos, eso sucedió en virtud de que desde la sociedad se captó correctamente que el maltrecho Estado y los cuestionados partidos políticos optaban por alternativas que favorecían los intereses de los actores socioeconómicos predominantes. R. Sidicaro, "Las desintegraciones institucionales argentinas y sus consecuencias sociales" en Punto de Vista, p. 37-40.

53 El desprestigio de la figura de Domingo Cavallo, y la consiguiente pérdida de su expectabilidad, ha sido una pérdida muy gravosa para las fuerzas conservadoras de Argentina. Con él, se derrumbaba no sólo la convertibilidad, sino la idea de que existía un portador de la solución de la crisis económica y, a la vez, posible articulador de un eje político de derecha que hoy aparece muy difícil de construir.

54 Esta avalancha de presencia popular en el espacio público ha sido objeto, pese al poco tiempo, de variados análisis y trazado de perspectivas, algunas de ellas muy interesantes. Entre ellas destaca el libro del Colectivo Situaciones, "19 y 20, Apuntes para el nuevo protagonismo social" en De Mano en Mano, abril de 2002, que juega, entre otros elementos, con la caducidad misma de la idea de representación, así como la de subjetividad política, que le da base. Sin necesidad de compartir por entero el enfoque, creemos que abre un camino fecundo para el análisis de lo ocurrido y la perspectiva del futuro cercano.

55 Nos referimos a la aseveración, que se convirtió en una suerte de sentido común en ciertos círculos intelectuales, de que en los tiempos que corrían, la política se hacía en los medios, y que ya no se movilizaban personas, sino imágenes.

56 El movimiento de los cortes de ruta que se desarrolló a partir de la segunda mitad de la década del '90 fue ganando en masividad y presencia, y se extendió desde la periferia (Patagonia, Noroeste) hacia el centro del país, hasta convertir a La Matanza (el partido más poblado del Gran Buenos Aires, con un importante porcentaje de población pobre) en lugar central. Ya a mediados de 2001, esto derivó en la realización de un congreso nacional de piqueteros y en el intento de conformar una agrupación nacional de los mismos, lo que no se concretó, multiplicándose hasta el momento las agrupaciones de trabajadores desocupados.

57 El efecto realimentador de la crisis política y del estado de esta decisión de seguir favoreciendo a los intereses socioeconómicos predominantes ha sido sintetizada en un artículo reciente por Ricardo Sidicaro. Cf. Sidicaro, R. Sidicaro, art. cit. en Punto de Vista.